

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 173 - 2010
LIMA

Lima, quince de setiembre de dos mil diez.-

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el encausado Carlos Elmer Reyes Vílchez y Arturo Lucio Quilca Chuco, contra la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil nueve, obrante a fojas seiscientos veinticuatro; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Barandiarán Dempwolf; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y, **CONSIDERANDO: Primero:** Que, la defensa técnica de los encausados Reyes Vílchez y Quilca Chuco, mediante recursos de nulidad obrante a fojas setecientos doce y setecientos quince, respectivamente cuestionan el *quantum* de la pena impuesta en la sentencia recurrida, argumentando que la sentencia ha restado valor a la confesión de los encausados, y que además la pena impuesta rompe los principios de resocialización y reinserción de los sentenciados a la sociedad; que no se ha considerado que al momento de los hechos sus patrocinados contaban con diecinueve años de edad, así como tampoco se ha tomado en cuenta su aspecto personal, social y el grado de cultura; por tanto, solicita la disminución de la pena por debajo del mínimo legal. **Segundo:** Que, la sentencia recurrida se expidió al amparo del artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós que regula el instituto procesal de la "Conclusión Anticipada del Juicio Oral", dicha norma sólo exige la aceptación del imputado de ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil, así como la conformidad del abogado defensor, siendo así, en el caso de

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 173 - 2010

LIMA

autos, se ha cumplido con dicha exigencia como es de verse de la sesión de audiencia de Juicio Oral de fecha veintisiete de agosto de dos mil nueve, obrante a fojas seiscientos treinta y uno, donde los encausados admitieron su responsabilidad penal, y el abogado defensor expresó su conformidad. **Tercero:** Que, el delito es un injusto culpable y como consecuencia se le impone una sanción penal, en el acto de determinación judicial de la pena como concreción de contenido delictivo del hecho implica, a la vez, el establecimiento del *quantum* de su merecimiento y necesidad, político-criminal, de pena; en efecto, dicho acto se configura esencialmente como aquél en virtud del que el injusto y culpabilidad, así como punibilidad, constituyen magnitudes materiales graduables, dado que estas cumplen una función cualitativa y cuantitativa. [ver, Silva SÁNCHEZ, Jesús-María *La Teoría de la Determinación de la Pena como Sistema dogmático*: un primer esbozo, en Revista para el Análisis del Derecho, Indret, Barcelona, abril de dos mil siete, página seis]; que, si bien la defensa de los encausados cuestiona el *quantum* de la pena, sin embargo, aparece de la sentencia que el Colegiado Superior ha tenido en cuenta las consideraciones previstas en el artículo cuarenta y seis del Código Penal sobre la individualización de la pena, tratándose de personas que provienen de nivel socio-económico bajo y su aceptación, y también se tomó en cuenta el artículo octavo del Título Preliminar del Código acotado que recoge el principio de proporcionalidad, entendida como la correspondencia debida entre la gravedad del hecho y la pena a imponer, por lo que, se concluye que la pena impuesta a los procesados se encuentra conforme a ley. **Cuarto:** Que si bien, los hechos imputados al encausado Quilca Chuco,

200

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 173 - 2010
LIMA

5
1M
O
A

por su naturaleza, forma y circunstancias en que se produjeron revisten gravedad, lo que ameritaría una mayor penalidad; sin embargo, en el caso concreto por imperio de la ley no procede modificar la pena impuesta en el sentido de aumentarla; ya que el artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve, reconoce el principio contenido en la locución latina "*non reformatio in peius*", relativo a la interdicción de la reforma peyorativa, y estando al acotado principio que a su vez constituye una garantía del debido proceso, que se encuentra implícitamente comprendido en nuestro texto constitucional, no se podrá modificar la condena sancionando los hechos imputados a dicho encausado con una pena más grave que la impuesta, por cuanto el representante del Ministerio Público no formuló el recurso impugnatorio correspondiente. Por estos fundamentos, declararon:

NO HABER NULIDAD en la sentencia condenatoria de fecha veintisiete de agosto de dos mil nueve, obrante a fojas seiscientos veinticuatro, en el extremo que condenó a Carlos Elmer Reyes Vélchez y Arturo Lucio Quilca Chuco como autores del delito Contra la Libertad Sexual en su modalidad de violación sexual de menor de edad en perjuicio de la menor identificada con clave número trescientos sesenta y uno – dos mil siete; asimismo, como autores del delito contra la Salud Pública en su modalidad de inducción o instigación al consumo de drogas en agravio del Estado; imponiéndole a Carlos Elmer Reyes Vélchez veinte años de pena privativa de la libertad efectiva; y a Arturo Lucio Quilca Chuco diez años de pena privativa de la libertad; y se le impuso el pago de

F

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 173 - 2010

LIMA

ciento ochenta días multa, equivalente al veinticinco por ciento de su ingreso diario que deberá abonar cada uno de los sentenciados a favor del Tesoro Público; y fijó en la suma de un mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar en forma solidaria los sentenciados a favor de la menor agraviada; así como en la suma de un mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar en forma solidaria los sentenciados a favor del Estado; y los devolvieron. Interviene el señor Juez Supremo Calderón Castillo por licencia del señor Juez Supremo Névra Flores.-

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARÁN DEMPWOL

CALDERÓN CASTILLO

SANTA MARÍA MORILLO

BD/orj

SE PUBLICO CONFORME A LEY

MIGUEL ÁNGEL SOTELO TASAYCO
SECRETARIO (e)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA